

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION DE LA PRODUCCION Y DEL COMERCIO

Sr. José Antonio Guzmán Matta

EN ENADE '95

NOVIEMBRE, 1995

Señoras y señores:

Es tradicional que la presentación empresarial de clausura en Enade, ante la más alta autoridad del país, cuya presencia agradecemos muy sinceramente hoy día, sea la oportunidad para exponer las ideas, el punto de vista y las inquietudes del sector en relación a la estrategia de desarrollo, la marcha de la economía y las políticas públicas relevantes para lograr los objetivos que el país se ha propuesto, procurando recoger los planteamientos realizados en el curso del encuentro.

En muchas ocasiones, estas intervenciones han estado marcadas por la expresión de acuerdos y la formulación de propuestas específicas, así como en otras han servido para manifestar diferencias de opinión sobre acciones u omisiones del gobierno en los aspectos mencionados.

Tal podría ser el caso actual, toda vez que es evidente que las relaciones entre el gobierno y los empresarios durante el año que termina, más allá del reconocimiento expreso que hemos realizado al exitoso resultado macroeconómico, han estado tensionadas por varios desencuentros respecto de iniciativas concretas impulsadas por la autoridad y aplazamiento de otras, que, a juicio nuestro, podrían arriesgar el dinámico proceso de crecimiento económico y social que ha exhibido el país en la década reciente.

Sin embargo, pienso que todos esos planteamientos han sido debidamente expuestos al señor Presidente de la República en otras intervenciones empresariales recientes y que es importante aprovechar esta oportunidad para efectuar algunas consideraciones sobre uno de los aspectos del desarrollo que consideramos más relevante y que ha sido abordado con detalle en el día de hoy: el tema social.

Ciertamente el comportamiento de las variables macroeconómicas son muy importantes, pero cuando hablamos del desarrollo no sólo estamos pensando en ellas, sino en el crecimiento armónico de todos los sectores del país, en la solución oportuna de las necesidades sociales de la población y en la abundancia de oportunidades que perfeccionen el espíritu, la cultura y el talento de todos los chilenos.

En los últimos tiempos, los empresarios hemos sido testigos y actores de un debate emergente que cuestiona la capacidad del modelo económico imperante de avanzar hacia la superación efectiva de la pobreza, que acusa al sistema de mantener o acentuar las desigualdades y que reclama de los empresarios un rol más activo y más solidario en la solución de los problemas sociales.

Muchas son las interrogantes que surgen de este debate, tanto sobre la justicia y veracidad de sus afirmaciones como sobre las intenciones que se esconden detrás de algunas de las posiciones planteadas, por lo que espero que estas reflexiones contribuyan a precisar las ideas y orientar una línea de acción en el sector empresarial, a la vez que faciliten la comprensión de otros actores sociales, del enfoque con que los empresarios estamos enfrentando y podemos enfrentar este tema en el futuro.

Deseo iniciar mis comentarios señalando con convicción que los cuestionamientos que he aludido carecen de fundamento válido.

Como ningún otro modelo económico aplicado en Chile en el curso del presente

siglo, la economía de mercado ha contribuido a reducir la pobreza material de los chilenos, acumulada por efecto de prolongadas políticas que entregaron la responsabilidad del desarrollo al Estado y limitaron la iniciativa privada.

De cada 10 chilenos que han abandonado la pobreza en la última década, 8 se lo deben al crecimiento económico y al aumento del empleo asociado a él, y sólo 2 a las políticas redistributivas.

Como en ningún otro instante en nuestra historia del siglo veinte, o quizás de siempre, tantos chilenos han tenido tal igualdad de oportunidades para mejorar su nivel de vida; de acceder a bienes materiales antes inalcanzables; de vincularse culturalmente con el resto del mundo; y de educarse para continuar progresando por sí mismos.

Como nunca antes, los empresarios hemos participado más activamente en el estudio sistemático y la solución racional de los problemas sociales que hoy día, en virtud de los espacios que nos ha abierto el modelo económico.

No sólo la dinámica creación de empleos sino el surgimiento de cientos de iniciativas empresariales, privadas y colectivas, en el ámbito de la salud, la previsión, la educación, la capacitación, la recreación, la cultura, el deporte y muchos otros, que involucran cuantiosos recursos humanos y materiales, dan cuenta de lo afirmado.

En fin, como lo ha señalado en varias ocasiones el Presidente de la República, por primera vez en los últimos cien años estamos frente a la oportunidad histórica de salir del subdesarrollo.

¿Qué fuerzas agitan, entonces, este debate? ¿Qué razones las mueven? Pienso que hay dos respuestas.

La primera es que, fuera de toda duda, la tarea de superar la pobreza, de extender las oportunidades de progreso a todos los chilenos, de comprometer a todo el país en la solución de estos problemas, no ha terminado aún de realizarse. Que resta aún un largo camino por recorrer. Y eso no deja satisfechas a muchas personas que, con loable intención, quisieran verlos resueltos a la brevedad posible. Y muy principalmente a los empresarios. La preocupación por los problemas sociales no es patrimonio del Estado ni de ningún grupo en particular.

La segunda respuesta es que hay personas que ven en este retraso la oportunidad de reivindicar antiguos y fracasados esquemas estatistas de desarrollo, que les permitieron por largo tiempo ejercer el poder y experimentar sus teorías, con claro prejuicio para el país y, en especial, para los grupos más pobres.

Pienso que, así como no es posible forzar a un gobierno que resuelva instantáneamente problemas que se arrastran por décadas, tampoco corresponde exigir resultados definitivos a un modelo económico que lleva pocos años de aplicación y al cual no se le ha dado la oportunidad de demostrar todo su potencial.

Tampoco es posible demandar a un sistema la solución de problemas de arrastre o la corrección de imperfecciones para los cuales no está diseñado. Quiero decir con esto, que el país ha heredado dificultades y sectores en situación de pobreza que éticamente está obligado a atender y sacar de su condición, a través del rol subsidiario del Estado y la acción solidaria del sector privado, pero que no fueron causados por el sistema económico actual y que no seguirán generándose en el futuro. Creo que de esta falta de comprensión surgen muchas de las objeciones de buena fe que se formulan al sistema imperante.

En nuestro país y en casi todo el mundo se impone con éxito la economía de mercado y, por tanto, nuestro deber es ensayar el uso de todas sus herramientas para solucionar los problemas económico-sociales que subsisten en el país, antes que deformarla, introduciéndole elementos regulatorios sofocantes e inhibitorios, propios de un sistema antagónico.

Tal vez la primera interrogante que debemos formularnos es qué es lo que queremos solucionar y cuando habremos de considerar resuelto el problema.

Creo que es fundamental reconocer que todavía existen grandes bolsones de pobreza en nuestro país y que los ingresos entre los distintos sectores marcan fuertes diferen-

as. Sin embargo, como se ha señalado en múltiples oportunidades, las políticas para abordar la solución de uno y otro problema son diferentes y, a menudo contradictorias entre sí, lo cual implica que en un país cuyos recursos todavía son escasos, es preciso definir cuál es el objetivo prioritario y dirigir todos los esfuerzos hacia ese objetivo.

Mientras las políticas para reducir la pobreza tienen por eje la creación de más riqueza y la focalización del gasto social hacia los sectores que realmente lo necesitan, a fin de establecer una efectiva igualdad de oportunidades, las otras se orientan solamente a distribuir los recursos existentes, en la búsqueda de un igualitarismo inalcanzable.

Tal es el caso de las políticas tributarias que, so pretexto de aumentar el gasto social, debilitan la capacidad de ahorro e inversión de las personas y empresas, y por ende, de crear nuevos empleos. O de las políticas laborales que, a título de proteger al sector laboral, otorgan una capacidad negociadora artificial para obtener incrementos salariales por encima del aumento de productividad, con claro perjuicio para la estabilidad monetaria, la estabilidad de las empresas y, especialmente, para los que no tienen trabajo. O de políticas fiscales expansivas que, con el fin de satisfacer presiones sectoriales, retardan la lucha contra la inflación, que tanto afecta a los más pobres. Todas éstas ya han sido reiteradamente su fracaso, no sólo como medio para disminuir la pobreza sino, también, para aminorar las diferencias de ingreso.

La pobreza no obedece ni coincide necesariamente con una mala distribución del ingreso. Hay países cuyo ingreso está distribuido muy equitativamente pero en que todos los habitantes son igualmente pobres. Otros, en cambio, poseen una distribución bastante desigual pero sus grupos de menores ingresos superan con creces el umbral de la pobreza.

Sin ánimo de ofender a nadie, baste recordar en este sentido el último informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas, que presenta a Bangladesh, Uganda, Etiopía y varios otros, como países mucho más equitativos que Chile, pero cuyo nivel de pobreza es conocidamente superior al nuestro.

No cabe duda que una política social de mercado orientada a erradicar la pobreza genera de por sí un efecto positivo en la distribución del ingreso, pues permite incorporar al circuito económico a sectores que estaban marginados de él. Viceversa, en cambio, no ocurre lo mismo, puesto que los mayores ingresos obtenidos a través de políticas redistributivas, por sectores de la sociedad generalmente localizados por encima del límite de la pobreza, sólo benefician parcial y transitoriamente a éstos y no a los que aún permanecen por debajo de ese límite.

En nuestro país se ha levantado como bandera política el desarrollo con equidad, en aparente alternativa al crecimiento económico, sin querer precisar que hay detrás de ese concepto. Pero el asunto no es quien propone un concepto más creativo para diferenciarse o descalificar la fórmula del otro, sino cuán eficaz es el contenido de las políticas aplicadas para solucionar las dificultades.

Si elegimos como opción prioritaria la erradicación de la pobreza y nos proponemos un plazo para ello, da igual el título que le pongamos. Si por otras razones, ya sea de tipo político electoral o presiones corporativas o por una auténtica convicción, como comienza a perfilarse hoy día, la autoridad o algún sector político opta por privilegiar la distribución del ingreso, aún con políticas que retrasan la superación de la pobreza, es necesario que el país tome plena conciencia y se pronuncie sobre ello.

Reconocemos, señor Presidente, la sensibilidad que usted ha mostrado por el tema de constituir el Consejo para la Superación de la Pobreza, del cual algunos empresarios formamos parte, pero creo necesario precisar aún más la política de gobierno a este respecto.

Me atrevo a afirmar que tanto por razones éticas como de estabilidad social, así como por el impacto dinamizador que puede significar la incorporación de vastos sectores al proceso económico, los empresarios y la gran mayoría del país, somos claramente partidarios de escoger la primera de las opciones mencionadas, es decir, privilegiar las políticas que permitan erradicar la pobreza en el menor plazo posible. Como señaló S.S.

Juan Pablo II en Chile, tantas veces recordado, los pobres no pueden esperar. Lo anterior no significa que estemos en contra de reducir las diferencias de ingreso, pero no al costo de impulsar políticas que obstaculicen o anulen la solución del problema que consideramos prioritario.

Pienso que la convergencia entre los ingresos de los distintos estratos sociales debe ser el resultado del aumento de productividad de la fuerza de trabajo, la cual sólo se logrará a través de una fuerte inversión empresarial en tecnología, en administración y en capacitación de sus trabajadores, así como a través de un decidido esfuerzo de la autoridad por elevar la competitividad general del país.

Una aproximación empresarial al tema sugiere tratar de identificar con la máxima precisión posible donde están los mayores problemas, qué causas los originan, cuáles son los mecanismos más eficientes para resolverlos y qué tarea está en condiciones de asumir cada uno.

Pocos temas reúnen tal cantidad de estudios y diagnósticos como éste. Desde aquellos que se concentran en describir las deplorables condiciones en que viven los más pobres, pasando por los que se reducen a dimensionar el fenómeno, hasta aquellos que vinculan estadísticamente la pobreza con el crecimiento y el empleo.

Recientemente se ha agregado un nuevo enfoque del problema, elaborado por el Centro de Estudios Públicos, que concluye que las causas y las condiciones para salir de la pobreza radican en buena medida en la actitud, las aspiraciones y el esfuerzo de los propios pobres para salir de su situación y que, por tanto, una nueva estrategia para erradicarla debe potenciar ese esfuerzo, habilitando a las personas y las familias para dar el paso, lo cual exige una modalidad altamente descentralizada en la elaboración y ejecución de los programas sociales, que reconozca la diversidad del problema.

De cualquier forma, en todas las alternativas conocidas queda en evidencia que el núcleo del problema y de la solución está en abrir a todos los jefes de hogar, hombres y mujeres, la oportunidad de obtener un ingreso estable que les permita satisfacer como mínimo las necesidades básicas de alimentación, vestuario y habitación de la familia, a través de un empleo adecuadamente remunerado. El desempleo es el alimento de la pobreza.

Lo anterior nos señala de entrada dos elementos esenciales y simultáneos que debe tener la lucha contra la pobreza, cuales son, el estímulo a la creación de empleos estables y la extensión de las facilidades para acceder a una educación o capacitación de calidad, que permita a los grupos más pobres aprovechar las oportunidades que les ofrece el sistema, en especial a los niños y jóvenes, a fin de evitar que reproduzcan el problema al llegar a la vida adulta.

Esta afirmación coincide plenamente con el sentir de las propias personas en situación de pobreza, quienes han atribuido reiteradamente su condición a las pocas oportunidades de empleo, a la falta de educación y a otras debilidades de carácter personal y familiar.

Afortunadamente, como consecuencia del modelo económico establecido, que ha estimulado el espíritu emprendedor y que ha impulsado una economía de mercado abierta a la competencia internacional, el sector empresarial chileno, renovado y fortalecido, ha creado en el curso de los últimos 12 años más de dos millones de empleos productivos, lo que ha permitido incrementar las remuneraciones reales durante el período en más de un 35%.

Pero debemos tomar conciencia que si queremos responder con éxito, al desafío de una mayor inserción internacional, deberemos aumentar la cantidad de trabajadores calificados, lo que redundará inevitablemente en mayores salarios.

En el campo educacional, el país tampoco se ha quedado atrás. Las reformas descentralizadoras impulsadas desde la década anterior, consiguieron aumentar significativamente la cobertura y la calidad promedio de la educación. Pero es evidente que en ambos aspectos, se aprecia una notable desigualdad entre los sectores urbanos y

urales, así como entre los distintos quintiles de ingreso, especialmente en la educación media.

En consecuencia, si queremos hacer de la educación una herramienta efectiva para superar la pobreza, tal como lo aconseja el valioso informe de la Comisión para la Modernización de la Educación formada por el señor Presidente, deberemos hacer un esfuerzo especial, pasando por encima de intereses sectoriales, para dotar de autonomía pedagógica y administrativa a cada establecimiento, reformar los planes y métodos de estudio, diversificar la oferta, elevar las exigencias, estimular los buenos desempeños y, al mismo tiempo, enaltecer y perfeccionar la profesión docente.

He señalado al comienzo de esta intervención que la tarea de comprometer a todo el país en la reducción de la pobreza no ha concluido. La identificación de los grupos más necesitados y de los mecanismos más eficientes para atenderlos no bastan, si no están claramente delimitados los ámbitos de acción en que puede colaborar cada sector de la sociedad.

Del análisis presentado queda de manifiesto que el primer rol que le cabe al Estado es el de establecer un marco adecuado, que a través de políticas económicas y sociales estables, estimule la creación de empleos por parte del sector privado. A su vez, éste tiene una alta responsabilidad de aprovechar ese marco para crear riqueza y así generar esas oportunidades.

Aunque sobre el particular pareciera haber un acuerdo conceptual y político bastante amplio, la reaparición periódica de propuestas inconsistentes con el objetivo anterior, en el ámbito tributario, laboral y regulatorio, así como la resistencia a abrir nuevos espacios y las presiones sobre actividades que ya desempeña el sector privado en el ámbito social, ponen en tela de juicio la genuina vocación de algunos sectores de gobierno por ampliar dicho marco. Pero no es ese el punto en que deseo extenderme.

Más bien deseo detenerme unos instantes en el rol que le cabe a todos los actores en la administración de los recursos que la sociedad chilena está destinando a la solución de los problemas sociales.

Con renovada frecuencia se viene reprochando a los empresarios su supuesta falta de solidaridad para con los asuntos sociales, desvalorizando la importancia de la creación de empleos y desconociendo o menospreciando la extensa labor individual o colectiva que realizan hacia el interior de la empresa o hacia la comunidad.

La primera pregunta que me formulo es por qué se recrimina sólo a los empresarios. Es claro que tenemos un compromiso pero, ¿acaso el resto de la sociedad está libre de obligaciones a este respecto? ¿Quién interpela a los profesionales, a los políticos, a los sindicalistas de cúpula o tantos otros actores que tienen igual responsabilidad y que, a través de sus propuestas postergan la solución del problema principal?

¿Quién interpela al Estado por la falta de solidaridad implícita en el uso ineficiente de los recursos puestos a su disposición? O, ¿en el ejercicio de una solidaridad estatal sin mérito técnico o que se queda a medio camino, sin llegar a los sectores que verdaderamente la necesitan? O peor aún, ¿en la deslealtad resultante de un uso corrupto de los bienes públicos? ¿Cómo explicar que apenas el 18,5% del gasto social llegue efectivamente al quintil más pobre? Lamentablemente la solidaridad impuesta desde arriba no se evalúa hasta después, cuando las equivocaciones que suelen cometerse ya no tienen remedio y han dejado frustrados a muchos chilenos.

Quienes encabezan estas recriminaciones a los empresarios, deben recordar que la legitimación social de éstos proviene del uso correcto y permanente de los talentos y atributos de que la naturaleza los ha dotado, de su disposición a asumir riesgos, de la materialización de su iniciativa creadora y de las oportunidades de trabajo que genera con ella, del ejercicio de su liderazgo en la sociedad, de la preocupación responsable por abrir oportunidades de desarrollo personal y económico a sus trabajadores y, sobre todo, de su capacidad para mantener vivas las empresas.

Es el lucro, es decir la obtención de beneficios, el que justifica y permite la existen-

cia de la empresa, el que prestigia a los empresarios y sustenta la expansión de la economía. Suponer que la obligación social que tenemos los empresarios es una forma de compensar las ganancias, es no entender la esencia del sistema económico. Creo que equivocan el camino quienes, para obtener un mayor compromiso social de los empresarios, pretenden despertar en ellos un sentimiento de culpa.

Lo que necesitamos es ampliar el espacio de que disponemos para llevar a cabo nuestra tarea, para emplear el talento administrador en acciones específicas, sin desconocer en forma realista, que hay tareas que sólo puede efectuar el Estado.

Para ello, es necesario descentralizar y focalizar más los programas sociales, enunciando políticas que reconozcan la diversidad de realidades y prioridades al interior de los estratos pobres, que posibiliten la realización de iniciativas locales y que transfieran recursos y responsabilidades a los agentes, públicos o privados, más próximos a los beneficiarios.

Los exitosos resultados de las múltiples acciones de orden social llevadas a cabo por el sector privado, ya sea en forma individual, familiar o colectiva, a través de las empresas y sus gremios, son garantía de que nuestro sector está en condiciones de asumir nuevas y mayores responsabilidades en la administración de esos recursos. La eficiencia de las innumerables instituciones privadas que amparan a niños, mujeres, jóvenes o ancianos en situación de extrema pobreza, es mérito más que suficiente para apoyar esos canales de solución.

Con el objeto de difundir y estimular la realización de nuevas iniciativas en este campo, la Confederación ha resuelto elaborar un estudio y recopilación de todas las acciones que lleva a cabo hoy el sector privado en este sentido, el que esperamos dar a conocer el próximo año.

Pienso que, al igual como se ha iniciado un proceso de participación de la empresa privada en la administración y el financiamiento de la educación y la cultura, a través de estímulos tributarios, asimismo debería extenderse dicho principio a otros ámbitos de interés social, avanzando hacia la denominada democracia tributaria, lo que abriría enormes oportunidades de acción, no sólo para usar eficazmente los recursos públicos, sino para despertar la confianza y atraer nuevos recursos de los agentes privados hacia el gasto social.

Señor Presidente, señoras y señores:

La importancia que el presente Encuentro Nacional de la Empresa le ha otorgado al tema social y a la superación de la pobreza no es un mero ejercicio intelectual.

Es, en primer término, el reflejo de una preocupación auténtica por un problema que afecta duramente aún a muchos chilenos y que obstaculiza nuestro avance hacia el desarrollo. Es el reflejo de una inquietud por la amenaza de retroceso y politización que se cierne sobre quienes ejercen el manejo económico, de parte de quienes no creen en la capacidad del sector privado y postulan una revitalización del Estado y de las políticas redistributivas. Es un reflejo del temor por el riesgo de postergar indefinidamente la solución del problema social, como ocurrió en el pasado y de perder la nueva oportunidad histórica que hoy tenemos.

Pero también es una expresión de confianza en que el camino emprendido por el país para erradicar la pobreza es el apropiado, en que el sector privado puede hacer mucho más y en que la meta es alcanzable en un plazo prudente.

Esto requiere que el país escoja la alternativa éticamente correcta y opte por erradicar la pobreza en el menor plazo posible. Pero también demanda un compromiso de parte de los empresarios. Compromiso de defender el modelo en que creemos; de perseverar por difíciles que sean las circunstancias; de utilizar los espacios que nos han concedido y aquellos nuevos que estamos reclamando; y de emplear nuestra capacidad e iniciativa creadora en avanzar en la solución de los problemas que aquí hemos tratado.

Debe saber usted, señor Presidente, que cuenta con los empresarios para llevar adelante esta impostergable tarea.